

# ¿Cuál es la guerra? Colombia, EE.UU. y la droga

Gómez-Buendía, Hernando

---

**Hernando Gómez Buendía:** Abogado y político colombiano. Actualmente es director del Instituto de Estudios Liberales, Bogotá. Profesor universitario de Economía y Ciencias Políticas. Fue secretario general del Partido Liberal.

---

*Son distintas las guerras que enfrentan EE.UU. y Colombia en relación al narcotráfico. Pero al mismo tiempo es una misma guerra, donde juegan roles diferentes ambas naciones. Los norteamericanos libran una primera guerra contra el consumo; una segunda, contra el crimen asociado a la droga; y varias subguerras contra los traficantes, los adictos, los distribuidores y los banqueros que están «in». Para los colombianos la diferencia entre una y otra guerra no es mucho más nítida. Guerra de los narcos contra la justicia penal; guerra de los narcos convertidos en terratenientes contra la izquierda política; guerra de los narcos contra la oligarquía tradicional... Guerras que interactúan y basta se confunden a veces, en el Norte o en el Sur. Ahora bien, ¿se trata - para Colombia - de una guerra-guerra, o de una operación policial en gran escala? ¿Es una guerra local o internacional?*

«Esta guerra la peleará Francia hasta el último soldado británico»  
(Sir Robert Vansittart, julio de 1940)

Recepción de comandante aliado en la Casa Blanca y ovación en la ONU; pero reticencias y críticas sordas en Colombia. Editoriales que aplauden la guerra; pero cócteles y tertulias donde se habla de paz. Lo primero significa que la guerra se está internacionalizando. Lo segundo, que el frente doméstico no es nada sólido. Ambos, que hay un poderoso influyente «enemigo interno» contra quien deben aliarse el gobierno y la comunidad mundial, abanderada por EE.UU. Aguas son éstas de altísima peligrosidad para Colombia, especialmente cuando la tripulación está aturdida y dividida.

Hay que recuperar la lucidez. Comenzar la guerra derrotando el miedo, el dogma y el autointerés. Por pensar sólo en Colombia, no caer en la trampa del chovinismo. Ni en la del oportunismo. Ni tampoco en la del moralismo. Para eso, tiene que abrirse la discusión pública, seria y serena sobre quién es el enemigo y sobre cuáles son los intereses vitales de Colombia en estas guerras. Porque - y aquí comienza la confusión - no es una, sino que son varias las guerras de la droga. Con distintos escenarios. Con distintos protagonistas y distintas coaliciones. Con distintas armas. Con distintas estrategias y distintas definiciones de la «victoria».

La cocaína es apenas una entre las muchas «sustancias químicas prohibidas por la ley que modifican la actividad mental del ser humano». Este simple hecho - más el que un 70% de los adictos mezclen o «migren» de una a otra droga, según el precio y la moda muestra cómo el problema tiene su raíz última en los factores socio-culturales que crean demanda por ese tipo de sustancia, no en que determinado país exporte una droga determinada. Lo dijo Donald Hamilton, asesor principal de la DEA, el 30 de septiembre de 1989: «Incluso si cerramos nuestras fronteras mañana para impedir el contrabando de narcóticos, la adicción nos seguirá carcomiendo mediante sintéticos fabricados en EE.UU.».

### ***Las guerras de EE.UU.***

La primera de las guerras es, pues, contra el uso mismo de la droga. Sus protagonistas son alrededor de 40 millones de consumidores en el mundo industrializado, los jóvenes y niños expuestos al vicio, los 12 países que - según el Narcotics Board de Naciones Unidas - dependen de la «narcoeconomía», las otras 27 naciones del Tercer Mundo que tienen «participación sustancial» en el tráfico, los cientos de laboratorios que operan en EE.UU. y Europa, muchos de los 20 millones de personas que, según Guttman, viven de la «economía subterránea» en EE.UU., en fin, los financistas que se lucran de una industria estimada entre los 300 y 500.000 millones de dólares al año (tanto como el 2-3% del producto mundial bruto).

Esta primera guerra nace de la desorganización social y de la presión cultural por psicoactivos, respaldadas por una alta capacidad de compra. Capacidad de compra: con 8 veces la población de Colombia, los Estados Unidos son un mercado 126 veces mayor que el colombiano, o 23% del mercado mundial. Desorganización social: 4 de cada 10 niños estadounidenses crecen en hogares sin padre, unos 27 millones de personas padecen de pobreza extrema, el desempleo de los negros llega hasta el 19% en algunas ciudades... Presión cultural: individualismo hipercompetitivo, contraste entre la riqueza como definición del éxito y la desesperanza econó-

mica en el ghetto, respeto profundo por la libertad y la privacidad como barrera a la eficaz represión del consumo.

Así, la primera guerra se gana o se pierde en los hogares, en las escuelas, en el ethos cultural de los países consumidores. Es una guerra de muy larga duración: viene desde 1851 - cuando el Estado de Maine prohibió el alcohol - o desde 1909 cuando EE.UU. convocó la primera conferencia internacional contra el opio. Es una guerra intermitente, con momentos de intensificación (cada dos décadas aproximadamente) y con momentos de olvido y aun de tolerancia (Carter y Ford en los 70, Kennedy en los 60). Es, sobre todo, una guerra ambigua, porque toca las más profundas ambivalencias de la civilización posindustrial.

### ***Contra el crimen***

La segunda guerra no es contra la droga, sino contra el crimen asociado con ella. Esta, no la primera, es quien moviliza efectivamente la opinión y quien explica los agresivos programas del gobierno norteamericano. Lo dice el propio Comisionado de Aduana William von Raab: «El pánico actual de este país se origina en el incremento de los crímenes y muertes relacionados con la droga». Los protagonistas de esta guerra son subconjuntos de la primera: los traficantes (definidos como delinquentes) más que los consumidores (definidos como enfermos); los adictos («peligrosos») más que los «usuarios ocasionales» (tolerados y hasta in); el «pusher», mucho más que el banquero... Casi 100.000 muertes violentas cada año, 6,5 millones de adictos graves, la población carcelaria triplicada desde 1970, el espectáculo horrendo de bebés deformes, madres vendiendo sus hijos para comprar crack, niños que ofrecen PCP en las calles de Nueva York o Detroit... son argumentos irrefutables para empeñarse a fondo en esta guerra.

Una manera de ganar la guerra contra el crimen es, por supuesto, la guerra - larga, intermitente y ambigua - contra la droga. La otra manera es descriminalizarla o «legalizarla». A lo cual se oponen el gobierno, el 74% de los norteamericanos encuestados en 1989, y aquellos analistas para quienes legalizar elevaría sustancialmente el consumo. Pero lo cual apoyan algunos políticos (el alcalde de Baltimore, p. ej.) y la mayoría de los historiadores (saben que el vicio no se extirpa, sino que cambia con las épocas), de los economistas (saben que la represión sólo eleva las ganancias ilícitas) y de los sociólogos (saben que la droga es fruto más bien que causa de desorganización social).

Por supuesto, la legalización como salida eventual a la guerra contra el crimen sólo sería eficaz si es adoptada por los países consumidores. Lo cual no implica que Colombia deba sustraerse a un debate que tanto la afecta, o que en su política internacional pueda ignorar, sin más, la diversidad de opiniones en esos países. Primero, porque quien disiente no es la franja lunática, sino conservadores tan respetables como Milton Friedman, William Buckley o la revista *The Economist*. Segundo, porque el dilema prohibición-legalización es menos tajante de lo que parece. Existen zonas grises, como la semi-legal marihuana, la metadona recetada, o la «dosis personal». Existen, sobre todo, versiones muy distintas del prohibicionismo y la legalización: de la completa libertad de mercado al monopolio estatal, de la legalización «médica» para adictos a la legalización «cultural» para todos, del rechazo radical a toda «intromisión del Estado en la vida privada» a la exigencia de cárcel para cualquier consumidor.

### ***El Plan Bennett***

En todo caso, la droga sigue siendo ilegal y EE.UU. sigue en guerra contra el crimen. El presidente Bush - como cada uno de sus antecesores desde Johnson - la declaró el 5 de septiembre de 1989. Solicitó del Congreso un presupuesto de 7.900 millones de dólares (23% mayor que el actual) destinados, en su orden, a la represión del consumo, el control de fronteras, el tratamiento de adictos, las campañas educativas y la asistencia a terceros países. A este «Plan Bennett» se le abonan el más explícito reconocimiento de la demanda como determinante principal del problema y el esfuerzo por coordinar las incongruentes políticas de las 22 agencias federales que trabajan en el área. Pero el Partido Demócrata y la prensa han señalado la falta de «fuerza e imaginación» al combatir lo que el propio Bush llamó «el principal enemigo de los EE.UU.» Poca fuerza es dedicar a la «guerra» un presupuesto 50 veces menor que el gasto militar, o financiar la «escalada» 5 con recortes al por menor en vez de adoptar impuestos bélicos. Poca imaginación es insistir en las mismas terapias que han venido fallando a lo largo de 20 años. Y fallan porque, como hace tiempo concluyó la criminología, «el único policía verdaderamente capaz de reducir el crimen es el policía internalizado mediante la cultura» (H.E. Pepinsky).

Aunque el Plan Bennett estaba preparado de tiempo atrás, la tragedia de agosto de 1989 en Colombia avivó el interés sobre la dimensión internacional del problema. La sentida voz de solidaridad con el presidente Barco y la oferta de ayuda económica a Colombia, Perú y Bolivia, fueron los dos mensajes del presidente Bush. Pero también aquí hubo críticas serias. Primera, aunque la cocaína y el crack son las

muy nocivas drogas de moda, fue notorio el silencio sobre la heroína (¿por qué proviene de países menos «seguros», como Birmania, Afganistán y Laos?) y las anfetaminas (producidas en casa). Segunda, los 261 millones de ayuda externa - 3,3% del total son demasiado dinero si se trata de intervenir en países amigos, pero son demasiado poco dinero si se trata de un esfuerzo de guerra aliado (al estilo OTAN).

### ***Las guerras de Colombia***

Según cuál año se tome y cuál fuente se consulte, a Colombia ingresan apenas entre 0,5 y 7 de cada 1.000 dólares generados por la industria mundial de la droga. ¿Por qué, entonces, somos una excepción entre los 41 países que participan del tráfico exportador? Se ofrecen cuatro explicaciones:

- El gran peso interno de la narcoeconomía que, según algunos, significa el 35% de las divisas, el 23% del PIB y el 3% del empleo. La mayoría de los estudios reportan, sin embargo, cifras muy inferiores (Fedesarrollo, p. ej., habla del 2% del PIB) y, en todo caso, ellas están lejos de las de Bolivia y otros países.

- La penetración económica y la aceptación social del «dinero caliente» (factor que subrayan los analistas estadounidenses). Ello es cierto y fue más cierto aún en tiempos de la «bonanza marimbera», y de la «narcobeneficiencia»; pero no es exclusivo de Colombia, sino que comienza por la propia banca internacional.

- Más característico es el papel estratégico de los carteles colombianos en el refinamiento, exportación y mayoreo de cocaína en Estados Unidos, lo cual hace al país altamente visible en el contexto mundial.

- Pero el rasgo verdaderamente excepcional del narcotráfico en Colombia es la intensidad de su violencia y, más aún, el enfocarla contra funcionarios y figuras políticas de primera magnitud. Por eso, antes que contra la droga o contra el crimen que rodea su consumo, la guerra que sufren y apoyan los colombianos es la guerra contra la violencia del narcotráfico. Guerras, porque - también aquí - son varias:

Primera, la guerra de los narcos contra la justicia penal. Sus protagonistas: delincuentes, jueces y policías. Sus motivos: la aplicación de la ley a delitos ordinarios o atroces asociados con el tráfico (incluida, pero no reducida, a la extradición). Sus víctimas: 7 magistrados, 41 jueces y más de 200 investigadores o auxiliares, desde 1979. Su tipo: violencia de intimidación contra el Poder Judicial.

Segunda, la guerra entre los narcos convertidos en terratenientes y la izquierda política. Sus protagonistas principales: la Unión Patriótica y los paramilitares. Sus motivos: desde los enfrentamientos con las FARC a raíz del «impuesto» a la coca, hasta la «cruzada» anticomunista. Sus víctimas: Jaime Pardo Leal, 840 activistas de la UP, periodistas y dirigentes sencillamente demócratas. Su tipo: violencia política contra la izquierda.

Tercera, la guerra entre un sector narco y un sector de la élite tradicional. Sus protagonistas esenciales: el Cartel de Medellín y el Nuevo Liberalismo. Sus motivos: la infiltración del narcodinero en la política (debates del ministro Lara, Pablo Escobar expulsado del «galanismo»...) y la extradición (caso Botero). Sus víctimas: de Rodrigo Lara Guillermo Cano, de Enrique Parejo a Luis Carlos Galán. Su tipo: violencia política contra la élite.

Hay, además, las guerras locales de Medellín o de Muzo, donde el dinero y los métodos de la mafia se acaballaron sobre viejas patologías - la sinsalida económica de Antioquía, las esmeraldas - para magnificar violencias de tipo social. Hay la narco-violencia guerrillera, desde y contra distintos movimientos insurgentes. Y hay la violencia intestina de un cartel contra otro.

Guerras que interactúan, y hasta se confunden a veces. Pero guerras distintas. Porque el grado de interés, la dirección y el compromiso de partidos y candidatos, de sectores económicos y opinión pública, de carteles y fuerzas de seguridad, de gobierno y poderes extranjeros, varían de uno a otro contexto.

### ***Sangre, sudor, lágrimas... y equivocaciones***

El magnicidio del 18 de agosto de 1989 (el de Luis Carlos Galán) fue el golpe quizá más estremecedor que haya recibido Colombia en su trágica historia de los últimos años. Tanto, que una reacción menos inmediata o menos dramática por parte del presidente hubiera sido inaceptable ante la indignada opinión nacional. Pero esa reacción dejó flotando cinco indefiniciones críticas: a) ¿Se trata de una guerra o de una operación policiva?; b) ¿Cuál es su preciso objetivo estratégico?; c) ¿Es un conflicto nacional o una guerra mundial?; d) ¿Quién es el enemigo interno?; e) ¿Qué se hizo la clase dirigente?

a) ¿Guerra u operación policiva? La guerra se da entre naciones soberanas, o entre un gobierno y un ejército que busca destituirlo. Descubrir y capturar delincuentes - así sean magnicidas y sean poderosos - es en cambio una operación de policía.

Pero, seguramente para subrayar la solemnidad de su empeño, el presidente Barco declaró la «guerra» delante de Colombia y delante de 158 países en la ONU. Con ello, hemos quedado atrapados en el malentendido de dos lenguajes y dos lógicas, entre unos fines de guerra y unos medios de policía. Malentendido que tiene serias implicaciones.

- Unas, políticas. Para castigar criminales, el Presidente no tiene por qué apelar a nadie distinto de sus subalternos con funciones de policía. La guerra, en cambio, es asumida por el Estado en pleno - Congreso, Corte y Gobierno - replantea las relaciones entre gobierno y oposición (¿dónde están el conservatismo, sus precandidatos, la UP?) y suele dar paso a un «gabinete de guerra» (no a la rotación entre funcionarios).

- Otras jurídicas, que tocan la colaboración entre el DAS (policía) y las fuerzas armadas (guerra), y tocan la constitucionalidad o no de instrumentos como la confiscación (guerra) o decomiso (policía).

- Otras, internacionales. Los operativos de policía necesitan de cooperación técnica entre las agencias especializadas y de apoyo logístico para capturar los delincuentes. La guerra supone diálogo político-militar en la cumbre, colaboración económica y diplomática a nivel global.

b) ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico? Los hechos de agosto de 1989 llevaron a su clímax N° 2 de las «guerras» de la droga en Colombia, las desatadas contra el poder judicial (el magistrado Valencia, el coronel Quintero) y contra la élite política (el gobernador Betancur, el senador Galán). La metáfora de «guerra» - y la discordancia entre voces oficiales - han impedido precisar, sin embargo, en cuál o cuáles de las «guerras» estamos empeñados, y cuál o cuáles son en consecuencia sus objetivos estratégicos.

1. ¿Se trata de simbolizar el dolor y la ira de Colombia? Porque los símbolos son tan esenciales como los hechos. Y porque, infortunadamente, no pasaron del plano simbólico las «guerras» por Rodrigo Lara y por Jaime Pardo, por Carlos Mauro Hoyos y por Guillermo Cano.

2. ¿Se trata de vengar el magnicidio (y dónde pararía la cadena de retaliaciones)? ¿De capturar a sus autores intelectuales? ¿De apresar los jefes de uno o de todos los carteles? (¿quiénes? ¿antes de cuándo?).

3. ¿Se trata de imponer límites infranqueables a la acción de la mafia, como sucedió en los propios EE.UU. (donde no asesinan jueces) y aun en México, en Francia y hasta en Turquía, en Japón y hasta en Italia o en la China del Kuomintang?
4. ¿Se trata de eliminar la violencia del narcotráfico como una modalidad exasperante - pero no única - de la violencia, según insinuó en la «Iniciativa para la Paz» el presidente Barco?
5. ¿Se trata de impedir que los «barones» de la droga residan en Colombia? (¿Durante cuánto tiempo?). ¿De que otras mafias desplacen a los colombianos? ¿De destruir su infraestructura cultivos, laboratorios, comercialización, lavado - toda ella? ¿De que la industria se traslade a otros países?
6. ¿O, en fin, se trata de contribuir a la guerra que los países consumidores libran contra el crimen en sus calles, tal vez a su guerra contra la droga misma?

### **Los objetivos**

No puede haber victoria si no es claro el objetivo. Máxime cuando esta guerra tiene peculiaridades que tanto la dificultan: la muy profunda infiltración del enemigo; el desbalance entre armas regulares y contra armas de corrupción; la asimetría entre unos pocos y bien escondidos blancos que atacar, y muchos blancos dispersos que defender; un 23% del pie de fuerza comprometido en la mera vigilancia de los bienes incautados; la amenaza latente de la guerra...

Se dirá que la guerra contra la droga tiene que ser radical e indiscriminada. Pero entonces habríamos de contestar por qué no la habíamos declarado desde hace tiempo. O se dirá que precisar el objetivo estratégico es competencia privativa del comandante. Pero en una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de saber hacia dónde van y si están avanzando o retrocediendo.

c) ¿Guerra local o guerra internacional? Primero fue el revivir la extradición, cuando ella parecía estar jurídicamente enterrada y cuando el magnicida es quizás el único delincuente que un país no puede entregar. Luego fue el viaje de la ministra de Greiffy la imagen, centuplicada ante el mundo, de una Colombia donde los buenos son débiles y necesitan apoyo contra los malos. El presidente Bush añadió siete referencias públicas de aplauso al «corajudo» presidente Barco. Vinieron los 65 millones de dólares en equipo. Se cruzaron cartas para resucitar el Pacto Cafetero, y EE.UU. agregó el tema de las preferencias comerciales. Se «filtró» una lista de par-



lamentarios con visa denegada. El presidente de Colombia fue recibido con honores en la Casa Blanca, aclamado en la ONU, declarado «Estadista del Año».

La guerra se ha internacionalizado. No hay que tener el ideologismo simplón de algunos columnistas, o la suspicacia de los presidentes Pastrana y Betancur, para tener que preocuparse por eso. Es tan simple como lo anotó el primer ministro canadiense Pierre Trudeau: «Meterse con los EE.UU. es compartir la cama con un elefante». Quien entra en esa cama - sea Israel o Polonia, Japón o Nicaragua - tiene que jugar según la regla básica: en EE.UU. la política internacional es política doméstica, donde no basta la simpatía de unos funcionarios (tampoco su antipatía) si ella es contradicha o si ella se enreda en la formidable complejidad sociopolítica del primer país del mundo. Con apuestas tan altas como las que se cruzan en las guerras internas de la droga en EE.UU., con el Tío Sam respirando tan cerca de nuestros hombros, la identificación de nuestros intereses vitales como nación y los espacios de maniobra para luchar nuestras guerras según nuestro propio orden de prioridades, han quedado muy seriamente comprometidos.

### ***¿Enfoque bilateral?***

Ante la internacionalización, queda la urgencia de replantear nuestro proyecto geopolítico, nuestra inserción en la «guerra mundial» declarada desde Colombia. ¿Podemos mantener el enfoque bilateral, que hemos utilizado en el caso de la deuda y que prefieren los EE.UU.? ¿O necesitamos de agresivos proyectos multilaterales en el caso de la droga? ¿Debemos (¿y podemos?) buscar el status de aliado, con sus grandes ventajas y sus grandes riesgos? ¿O nos conviene mantener los entendimientos y las distancias?

d) ¿Quién es el enemigo? Junto con la internacionalización, se ha ido ampliando la definición del «enemigo interno». De «magnicida» se pasó a «narcotraficante», luego a político o periodista presuntamente «untado», a vendedor de una finca o un cuadro, y hasta a crítico de la extradición o de la confiscación. A tal punto, que el Consejo de Seguridad colombiano tuvo que emitir un oblicuo comunicado donde se denuncian las denuncias como tácticas divisionistas del «verdadero» enemigo.

Pero sigue flotando la indefinición. Y se agrava la polarización, obligándonos a tomar partido, no de lado y lado de la violencia, sino de lado y lado de la droga (sobre la cual ignoramos casi todo). Consagrando como único discurso moralmente válido el de la guerra total; y obligando a que los implicados por insinuación, se refugien en el único discurso que puede hacer frente público al moralismo: el discurs-

so antiimperialista. Hasta encajarnos a todos en el dilema absurdo y trágico de estar «con la moral pero con el Imperio», o estar «con la Patria pero con el crimen».

e) ¿Dónde está la clase dirigente? Igual que la nobleza de Francia, que «usufructuó la paz y se escondió en la guerra», la clase dirigente de Colombia ha dejado de dirigir. Como nunca antes, el discurso público se ha ido apartando de la conversación privada. Y el presidente se ha ido quedando solo, sin la unanimidad siquiera de su gabinete; sólo, con el discurso público que son los editoriales y el discurso distante que es el aplauso de los organismos y gobiernos extranjeros

Los gremios, los directorios políticos, los candidatos presidenciales, repiten mientras tanto fórmulas rituales o, mucho más, se escabullen en evasivas y en silencios. Temen el apelativo de «deshonesto» o de «derrotista» - tan fácil en un clima de histeria pero temen también - y con razón - por su propia vida. Conscientes de las distancias entre palabra oficial y sentimiento privado, no atinan a saber dónde está la opinión, para poder complacerla. Intuyen que aún una propuesta desprevenida puede arrastrarlos a coaliciones insospechadas, en un país donde todas las controversias quedaron de pronto reducidas a la posición que se tenga frente a la droga. Quedaron aturridos en el momento más difícil de Colombia.

Es una ética política lo que está en crisis. La ética de responder a los desafíos públicos con las convicciones privadas de los gobernantes. La ética de reaccionar según la última crisis o el próximo voto, no según esa «idea eterna» de que hablaba De Gaulle y que es el hilo histórico de una nación. La ética que salta del dogmatismo inmóvil a la compulsión inútil. La ética de las intenciones, válida en la vida privada, en vez de la ética de los resultados, obligatoria cuando se tienen responsabilidades colectivas. Esta otra ética que habría de fundarse en la reflexión sobre lo que cada episodio de violencia dice sobre nosotros mismos, sobre las instituciones que hemos creado para regular nuestras vidas, sobre el lugar que ocupamos y el que soñamos ocupar en el mundo.